

UNIVERSIDAD MILITAR

NUEVA GRANADA



**EFFECTOS DE LA VIOLENCIA PARAMILITAR EN LA COMUNIDAD
COLOMBIANA EN LOS AÑOS 1990 AL 2006.**

:

LUIS LAEJANDRO BARRAGAN CASTAÑEDA

ENSAYO

DOCTORA: MARTHA RUEDA

DIRECTORA DE PROYECTO

UNIVERSIADA MILITAR NUEVA GRANADA

**FACULTAD DE RELACIONES INTERNACIONALES, ESTRATEGIA Y
SEGURIDAD**

ESPECIALIZACION EN ALTA GERENCIA DE LA DEFENSA NACIONAL

BOGOTA

2012

INDICE

INTRODUCCIÓN	1
HISTORIA:	2
ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO	4
LA EXPANSION DEL PARAMILITARISMO EN LOS AÑOS 1997 AL 2002.....	6
PRETENCIONES GEOESTRATEGICAS DEL PARAMILITARISMO	8
PROBLEMATICA REGIONAL.....	8
REGIONES MÁS AFECTADAS	10
MASACRES	16
RELACIONES DEL PARAMILITARISMO	18
PARAMILITARISMO Y EL <i>NARCOTRAFICO</i>	18
EL ESTADO Y GRUPOS SOCIALES	20
LA FUERZA PÚBLICA Y AUTORIDADES CIVILES	21
DESMOVILIZACION DEL PARAMILITARISMO	22
LA MULTICRIMINALIDAD	26
CONCLUSIONES.....	27
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	29

EFFECTOS DE LA VIOLENCIA PARAMILITAR EN LA COMUNIDAD COLOMBIANA EN LOS AÑOS 1990 AL 2006.

LUIS ALEJANDRO BARRAGAN*

RESUMEN

En estas líneas se pretende ilustrar una información más detallada sobre los efectos sociales y políticos que genera la violencia paramilitar en Colombia, procurando que alrededor de dicha problemática, de un origen a una reflexión, concientización y comprensión del tema desde una perspectiva sociopolítica y su efecto en la seguridad nacional. En el mismo sentido cómo el paramilitarismo incidió en los hechos de violencia política en Colombia durante los últimos veinte años, y cómo a través de sus acciones de barbarie y desolación, ha logrado infiltrar distintos sectores de la sociedad y el Estado, obteniendo un alto nivel de poder político, económico y territorial.

Analizar los efectos de la violencia del paramilitarismo desde su dimensión política, social, económica y jurídica, donde sobresale la ausencia del Estado en ciertas zonas de la geografía nacional. Las diferentes masacres y las consecuencias en la población desprotegida a la espera de una política estatal perdurable que disminuyera los actos de la violencia y pobreza mediante la presencia de los gobiernos de turno con una política clara de seguridad y defensa nacional.

Palabras Claves: paramilitares, desplazamiento, forzado, violencia, pobreza, efectos sociales y económicos, sociedad.

ABSTRACT

In these lines is intended to illustrate a more detailed information on the social and political effects generated by paramilitary violence in Colombia, ensuring that around such problems, from a source to a reflection, awareness and understanding of the topic from a socio-political perspective and its effect on national security. In the same sense as paramilitarism affected acts of political violence in Colombia during the last twenty years, and how through their actions of barbarism and desolation, has managed to infiltrate various sectors of society and the State, obtaining a high level of political, economic and territorial. Analyse the effects of the violence of paramilitary activity from its political, social, economic and legal dimension, where stands the absence of the State in certain areas of the country. The different massacres and the consequences on the population unprotected waiting for a lasting State policy that diminish the acts of violence and poverty through the presence of Governments with a clear policy of security and national defence.

Key words: paramilitary groups, displacement, forced, violence, poverty, social and economic effects, society.

LUIS ALEJANDRO BARRAGAN: Oficial Policía Nacional®, Administrador de Empresas, Especialista en Gerencia de Marketing, Consultor de Seguridad, Criminalística, Policía Judicial e Inteligencia.

INTRODUCCIÓN

El paramilitarismo es un fenómeno de violencia ejecutado por los integrantes de grupos al margen de la ley que han causado daño a la comunidad colombiana y al país en las últimas tres décadas. Sus acciones se han reflejado en innumerables masacres, desapariciones forzadas, asesinatos, torturas y masivos desplazamientos forzados. Los paramilitares se presentaban bajo la forma de una estructura u organización armada contrainsurgente de tipo militar y paraestatal, contraria a la ley, que surge en Colombia en los inicios de la década de los años 80 y que se diseminó en regiones que se describirán en forma específica más adelante. Los paramilitares surgieron con el apoyo de algunos miembros o individuos de la fuerza pública, de ciertos grupos económicos y políticos, del narcotráfico e incluso de algunos sectores sociales, quienes lo promovieron con el fin obtener el poder en diferentes ámbitos del estado y la sociedad.

En algunas regiones de Colombia (Ver gráfica 1) se presentaba ausencia de los gobiernos los cuales no podían satisfacer las necesidades de los ciudadanos y ejercer control estatal sobre el territorio y protección a la población, son los hechos que han incidido en el surgimiento de las organizaciones armadas al margen de la ley en Colombia, entre ellas, los grupos paramilitares, quienes pretendían avanzar su estrategia de poder a lo largo del territorio nacional.

En estas líneas se pretende transmitir una información más detallada sobre los efectos sociales y políticos que genera la violencia paramilitar en Colombia, procurando que alrededor de dicha problemática, de un origen a una reflexión, concientización y comprensión del tema desde una perspectiva sociopolítica y su efecto en la seguridad nacional. El paramilitarismo incidió en los hechos de

violencia política en Colombia durante los últimos veinte años, y cómo a través de sus acciones de barbarie y desolación, logro infiltrar distintos sectores de la sociedad y el Estado, obteniendo un alto nivel de poder político, económico y territorial.

Analizar los efectos de la violencia del paramilitarismo desde su dimensión política, social, económica y jurídica, donde sobresale la ausencia del Estado en ciertas zonas de la geografía nacional; la ocupación de dichas zonas principalmente por grupos guerrilleros y paramilitares y el poco compromiso de algunos miembros de las autoridades para recuperar los territorios y auspiciar su desarrollo, este último que es donde más sea fallado por no tener algunos gobiernos una política clara de seguridad y defensa nacional.

Enseñar las consecuencias de las falencias en los procesos o procedimientos de desmovilización lo cual ha originado la multictiminalidad como la delincuencia común y otras más organizadas como las BACRIM, las cuales remplazaron a los grupos paramilitares.

HISTORIA:

Existen muchas versiones sobre el origen o creación del paramilitarismo en grupos como el MAS (Muerte a secuestradores), los Latifundistas o Ganaderos, los Pepes perseguidos por Pablo Escobar, (Jefe del cartel de Medellín), la Fuerza Pública, las Convivir o cuando Gonzalo Rodríguez Gacha “Mexicano” les declaró la guerra a las FARC por la pérdida de un dinero y un cargamento de cocaína. Expertos consideran que es muy difícil precisar en qué fecha exacta se inició el paramilitarismo (Rosania, septiembre 2012).

La historia del país tomó un nuevo rumbo en el año 1981 debido a un secuestro que detonó la guerra entre narcos y la guerrilla, originando el surgimiento del grupo Muerte a Secuestradores, considerado como la primera manifestación a gran escala del paramilitarismo. El 12 de noviembre de 1981, Luis Gabriel Bernal Villegas, miembro de un comando del M-19, secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de Fabio, Jorge Luis y Juan David Ochoa, miembros del Cartel de Medellín. El secuestro de la hija de “Don Fabio”, como era conocido en el mundo de criadores de caballos de exposición del país, fue el motivo de la reunión en la que se conformaría el primer grupo de autodefensas.

El 1 de diciembre de 1981, los hermanos de Martha Nieves Ochoa convocaron a un encuentro de urgencia que se realizó en el Hotel Intercontinental de Medellín al que asistieron 223 personas, la mayoría jefes de la mafia, entre ellos, Pablo Escobar, Carlos Ledher y Gonzalo Rodríguez Gacha. El objetivo de esta reunión fue el de contrarrestar las acciones de los grupos guerrilleros, y en el que los asistentes dieron cada uno 2 millones de pesos y 10 de sus mejores hombres. De esta manera nació el MAS, un ejército privado de 2.230 hombres y un fondo de 446 millones de pesos para “recompensas, ejecuciones y equipo”.

Con los hombres organizados y las armas compradas, se dio inicio a la venganza por el secuestro de Martha Ochoa. Gabriel Bernal Villegas exigía un pago de 12 millones de dólares por la liberación de Martha Nieves. La familia Ochoa se negó y ofreció una recompensa. En retaliación por la acción del M19, el MAS secuestró a 25 personas cercanas a Villegas Bernal, entre ellas a su esposa, Martha Correa Velázquez. De esta manera se presionó a Villegas y pronto lograron la liberación de Martha Ochoa 92 días después de su raptó y sin pagar la respectiva recompensa.

El Paramilitarismo en Colombia hace referencia principalmente al fenómeno histórico relacionado con el accionar de grupos armados ilegales de extrema derecha organizados a partir de la década de los setentas con el fin de combatir a

los grupos armados de extrema izquierda (guerrillas colombianas). Estos grupos paramilitares, también denominados Autodefensas, se extendieron por diversas regiones del territorio nacional con la participación de ricos hacendados, colonos y pequeños industriales. En la década de los noventa, diversos grupos paramilitares conformaron una entidad mayor, de influencia nacional, denominada Autodefensas Unidas de Colombia - AUC.

El conflicto se recrudeció luego de la aparición de las autodefensas empezó a expandirse a diferentes regiones del país: Caquetá, en el Magdalena Medio, Meta, el nordeste antioqueño, Arauca, Casanare y el Valle. Cada vez eran más recurrentes los secuestros, torturas, desapariciones, y asesinatos de guerrilleros o sospechosos de simpatizar con ellos, que demostraban la seriedad del grupo antissubversivo.

ORIGEN DEL CONFLICTO ARMADO

En Colombia, el conflicto político se remonta al siglo XIX, como consecuencia de las diferencias y rivalidades surgidas entre los partidos tradicionales, liberal y conservador, que para ese entonces, representaban los intereses de algunas de las clases sociales más representativas del país. Dicho conflicto adquirió mayor fortaleza durante la guerra civil de los Mil Días, que tuvo lugar entre los años de 1889 a 1902, y que concluyó con el triunfo de los conservadores sobre los liberales, promoviéndose así un largo periodo de violencia partidista, que se extendería hasta 1953, y que encuentra su punto álgido con la muerte del líder liberal Jorge Eliecer Gaitán en 1948, cuyo asesinato provocó una encarnizada revuelta popular conocida como "El Bogotazo". Luego de un periodo de dictadura militar, al mando del general Rojas Pinilla (1953 a 1957), los partidos liberales y conservador formaron lo que se llamó "*El Frente Nacional*", (Sánchez, 2009) que fue un acuerdo político entre ellos, que les permitió a sus líderes alternarse el poder y repartirse por igual los cargos públicos durante cuatro periodos de

gobierno (16 años), marginado a otras fuerzas políticas que surgían en representación de sectores minoritarios de la población.

En el libro guerra insurgente (Rangel, 2001), el autor relata o manifiesta que “los grupos paramilitares se han perfilado como un proyecto contrainsurgente de carácter civil. Al principio únicamente pretendían brindar seguridad a los pobladores de las zonas rurales y más tarde iniciaron acciones ofensivas destinadas a disputarle a la guerrilla el control de determinados territorios. A medida que su poder económico y territorial se expanden, gana el apoyo de sectores político, social y económico”

Posteriormente, el conflicto político se reinicia en la década de los años 60, con el surgimiento de grupos armados de izquierda conocidos como guerrillas, las cuales fueron el resultado de una política de exclusión social y partidista, de la distribución desigual de las tierras y de la injusticia social y económica, liderada por los gobiernos de turno. Estos grupos de izquierda aparecen, inicialmente, en aquellas zonas de la geografía nacional donde no hacía presencia el Estado, concretamente en algunos sectores de los departamentos de Cundinamarca, Huila, Tolima y Meta, y ciertos territorios del Magdalena Medio, ocupados por campesinos que participaron en el conflicto político de los años 50, y que mantenían una confrontación ideológica y política con el Estado, en demanda de la reivindicación de sus derechos sociales y de una Reforma Agraria que les permitiera el acceso a la tierra.

Los territorios mencionados sirvieron de asiento a los primeros grupos de izquierda, en los inicios de la década de los años 60, fueron objeto de un proceso de asilamiento institucional con respecto a las demás zonas ocupadas del País, y en ellos no hacían presencia las distintas autoridades públicas, en desarrollo de una equivocada estrategia donde se exigía que las fuerzas militares lo

solucionaran (Sánchez,2010) y no el Estado (división de poderes-poder ejecutivo) implementando una verdadera solución y alternativa social donde los campesinos reclamaban la atención del Estado para que le fueran reconocidos sus derechos. Como resultado de lo anterior los campesinos ocuparon estas estas tierras constituyéndose tal situación, en el ambiente propicio para dar origen y albergar a las primeras organizaciones guerrilleras de izquierda.

En este escenario, la aparición de las guerrillas, entre las que se destacan las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), el ELN (Ejército de Liberación Nacional), el EPL (Ejército Popular de Liberación) en el Urabá antioqueño y posteriormente el M-19 (Movimiento 19 de Abril), marcó la vida política del país desde entonces, con su objetivo ideario de tomarse el poder, con la disculpa de proteger los derechos de las clases menos favorecidas y marginadas. A la aparición de los grupos guerrilleros le siguieron después el narcotráfico y los grupos de autodefensas que en las últimas décadas se constituyeron también en un factor importante en el panorama de violencia que aún ahora afecta al país.

LA EXPANSION DEL PARAMILITARISMO EN LOS AÑOS 1997 AL 2002

El año 1997 fue una época clave para los paramilitares, Carlos Castaño logra integrar los diferentes grupos que delinquían en el país constituyendo las Autodefensas Unidas de Colombia. Éstas marcarían una de las épocas más sangrientas de la historia del país, en la que se registrarían más de mil masacres, millones de personas desplazadas por la violencia (Grafica 1), la alianza de paramilitares y políticos en las regiones y la expansión del poder paramilitar en todo el país.

En abril de 1997, las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, las del Magdalena Medio y las de los Llanos Orientales se unieron para conformar las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Estos grupos atomizados se reunieron bajo la bandera de las AUC, con el propósito de presentarse como una organización con un mando unificado, un plan nacional, una coordinación multirregional de las acciones y una agenda con pretensiones programáticas, todo con miras a lograr un espacio en la negociación con el Estado y un estatus que garantizara, a futuro, su reconocimiento como actor político.

A partir de este momento, las autodefensas se trazan la meta de contener la expansión de la guerrilla e incursionar en las zonas donde estos grupos tienen sus fuentes de financiamiento, principalmente del narcotráfico. Siguiendo este propósito, en 1997, se presentan hechos de violencia en varias regiones, poniendo de presente el salto que se comenzaba a producir en el patrón de crecimiento de las autodefensas.

Durante las negociaciones de paz entre el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y las FARC, la presencia territorial de las autodefensas experimenta un crecimiento sin precedentes. En noviembre de 1998, coincidiendo con el inicio del proceso de paz, las AUC asesinan a 40 personas e incineran alrededor de 100 casas en Bolívar, Antioquia, Meta y Vichada. Posteriormente, en diciembre del mismo año, aprovechando la declaración por parte de las AUC de una tregua unilateral durante la época de navidad, las FARC atacaron el cuartel general de Carlos Castaño en el Nudo de Paramillo.

La retaliación a la incursión guerrillera (Nudo de Paramillo) que por poco le cuesta la vida al comandante de las autodefensas, no se hizo esperar y, en enero de 1999, las ACCU asesinaron a 130 personas por tener supuestos vínculos con la subversión.

PRETENCIONES GEOESTRATEGICAS DEL PARAMILITARISMO

La intensificación de las masacres entre 1998 y 2001, se explica por la lógica de expansión de los grupos paramilitares, inscrita en el propósito de crear un corredor que dividiera el norte del centro del país y que, a su vez, permitiera el control de la producción de coca entre Urabá, Bajo Cauca, sur de Bolívar y Catatumbo. De esta forma, los grupos paramilitares contarían con la posibilidad de incursionar en las zonas de retaguardia de las FARC, ubicadas en el sur y oriente del país.

En la disputa por el control de posiciones estratégicas, la guerrilla termina respondiendo con las mismas armas de los paramilitares. De aquí que la guerrilla, particularmente las FARC, incremente la ejecución de asesinatos y masacres entre 1997 y 2001, siguiendo a las autodefensas que fueron las que ostentaron el mayor número de víctimas. (Gráfica 2). Así mismo, se descubre la razón del enfrentamiento entre guerrillas y autodefensas en regiones como la Sierra Nevada de Santa Marta, Norte de Santander, Chocó, Urabá, Magdalena Medio, Montes de María o Nariño, donde los grupos armados actúan con especial intensidad atacando civiles, para lograr el control sobre corredores y zonas de retaguardia, avanzada y obtención de recursos económicos.

PROBLEMATICA REGIONAL

En Colombia, durante muchas décadas, algunos territorios escaparon al control del gobierno y sobre ellos no se ejercía soberanía. Allí no tenían asiento las distintas autoridades, políticas, administrativas y judiciales, lo que sin duda, influyó notoriamente en estado actual de violencia y en el surgimiento de los distintos actores armados. Dicha práctica, con el tiempo, se extendió a otros espacios en los cuales, si bien hacían presencia las autoridades legítimamente constituidas, no era posible que ellas ejercieran sus funciones y protegieran a la población civil, en cuanto fueron infiltradas, controladas y dominadas por los distintos grupos de poder, entre ellos los guerrilleros y paramilitares.

La ausencia del Estado en algunas regiones del territorio, y la imposibilidad en algunos para ejercer un control sobre ellas, fueron entonces factores determinantes en el surgimiento de los grupos guerrilleros y luego de los paramilitares, con las graves consecuencias que la presencia de estos actores armados ha implicado para el país en el orden político, económico y social.

Esas regiones donde la institucionalidad estuvo ausente, fueron paulatinamente ocupadas y dominadas por los distintos actores armados que hoy hacen parte del conflicto, en particular por los grupos guerrilleros de izquierda, convirtiéndose en sus fortines políticos y de lucha, sin que las autoridades se interesaran porque aquellas regiones fueran vinculadas a las dinámicas normales del resto del país. Ese fenómeno con el tiempo se extendió a otras zonas del país, donde era evidente que el estado no ejercía la autoridad y no estaba en capacidad de brindar seguridad para generar desarrollo en busca del bien común de la población colombiana (Comando General de las FFMM, 1996).

Sin embargo, como ya se mencionó, los grupos paramilitares se convirtieron en verdaderas organizaciones delictivas y criminales, al servicio de distintos intereses particulares y en contra de la población civil. Se constituyó en un instrumento para defender, asegurar y ampliar los intereses de ciertos sectores políticos, económicos y sociales, asociándose con el narcotráfico. Por la vía de la violencia, de las masacres y el desplazamiento forzado, obtuvo el control sobre amplias zonas del territorio nacional ricas en recursos naturales y de alta biodiversidad, regiones estratégicas, tierras fértiles y aptas para la agroindustria y con potencial para proyectos de infraestructura.

Es importante reconocer que durante los dos gobiernos del Presidente Álvaro Uribe, entre los años 2002 - 2010, como consecuencia de su política de seguridad,

Colombia entró en un proceso de institucionalización de aquellas zonas del territorio nacional que se encontraban bajo el dominio de los grupos guerrilleros, paramilitares y narcotraficantes, desplazando a tales grupos por la vía armada y garantizando la presencia de las autoridades políticas, civiles y judiciales del Estado; como se podrá recordar se llegó al punto en que los ciudadanos no podían viajar o compartir con sus familias en los sectores rurales o fuera de las ciudades capitales porque eran objeto de secuestros. Falto control por parte del aparato gubernamental estatal sobre los problemas abordados en los consejos comunales, debido a que en muchos lugares falto la inversión social, educativa y económica.

REGIONES MÁS AFECTADAS:

Un estudio realizado por la desaparecida Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación el 15 de febrero del 2011, identificó las regiones y las comunidades más golpeadas por el conflicto paramilitar y la confrontación con la guerrilla por el territorio y sus corredores estratégicos para el tráfico de drogas ilícitas. (Grafica 1)

1.-Sur de Bolívar, Yondó y El Bagre:

Es una de las regiones más ricas y mejor ubicadas del país. A finales de los años noventa se disputaron los grupos armados ilegales la serranía de San Lucas, donde hay explotaciones de oro, así como por el acceso que ofrece el río Magdalena, su cercanía a la refinería de Barrancabermeja y por ser paso obligado para las comunicaciones del país. Según lo han confesado varios ex paramilitares en Justicia y Paz “Artículo 1, ley 975 de 2005, tiene por objeto facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, a finales de los años noventa los hermanos Carlos y Vicente Castaño ordenaron la exportación de paramilitares al sur de Bolívar.

La situación de derechos humanos en la región se convulsionó provocando 99.531 personas en situación de desplazamiento, 38 víctimas en masacres, 169 víctimas de minas antipersonal y homicidios contra alcaldes, concejales, periodistas, sindicalistas, y líderes comunitarios.

2.-Montes de María

Compuesta por varios municipios de Sucre y Bolívar, fue una zona disputada desde finales de la década de 1990 por guerrilleros y paramilitares en su puja por el control de las rutas de comunicación y del narcotráfico hacia la Costa Caribe. En 1997 la violencia se incrementó en la región tras la incursión del Bloque Norte de las AUC a cargo de Rodrigo Tovar Pupo alias 'Jorge 40', que llegó matando a los líderes de la región.

Según datos de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, entre 1997 y 2009 en esta región los grupos armados ilegales cometieron 45 masacres, entre ellas la de Macayepo, Mampuján y El Salado, desplazaron a 219.603 personas y 242 personas fueron víctimas de minas anti-personal.

3.-Catatumbo

Comprendida por los municipios El Tarra, Tibú, Convención, San Calixto, Teorama y El Carmen, en Norte de Santander, es estratégica por su relieve montañoso, cercanía con la frontera venezolana, ríos y conexión con el Nudo de Paramillo, el norte de Antioquia, el Bajo Cauca Antioqueño, el Magdalena Medio, sur de Bolívar y Cesar.

Entre las décadas de 1970 y 1980, en esta región delinquiró la guerrilla hasta que la Casa Castaño¹ envió en 1999 a un grupo de paramilitar que luego se conoció como el Bloque Catatumbo a cargo de Salvatore Mancuso. Allí las AUC cometieron masacres e incluso crearon un crematorio ilegal para desaparecer a

¹ Se le denominó así a la finca las Tangas, ubicada en el corregimiento Villa Nueva a tres kilómetros de Valencia, a orillas del río Sinú.

sus víctimas, según lo confesó en varias versiones libres Jorge Iván Laverde alias “El Iguano”. Este grupo dejó por lo menos 8 mil víctimas en esta región del país.

A partir de 2002 el Catatumbo presentó las más altas tasas de victimización con 25 masacres en las que fueron asesinadas 203 personas, mientras que en otros casos se registraron 430 víctimas de minas antipersonal; en la región 71.825 personas fueron desplazadas, de las cuales solo en 2002 lo hicieron 21 mil personas.

4-. Sur Oriente Antioqueño

Esta región integrada por varios nueve municipios de Antioquia y dos de Caldas es apetecida desde hace varios años por los grupos armados ilegales por su cercanía con el Valle de Aburrá. En la década de 1970 el gobierno desarrolló dos proyectos de impacto nacional como fueron el complejo hidroeléctrico del Peñol, San Rafael y San Carlos y la autopista con conexión Medellín-Bogotá, constituyendo dos ciudades enclaves económicos del país.

En Antioquia, principalmente en los barrios más pobres de Medellín capital de departamento, los paramilitares delinquieron con lo que se conoció primero como el Bloque Metro a cargo de Carlos Mauricio García alias ‘Doblezero’ y luego como el Bloque Cacique Nutibara a cargo de Diego Fernando Murillo alias ‘Don Berna’. El número de víctimas en la región con 57 masacres en las que fueron asesinadas 319 personas, 755 pisaron minas antipersonal y 171.180 fueron desplazadas, de las cuales 37.926 abandonaron sus tierras en 2002.

5-.Urabá antioqueño y chocoano

Esta esquina del país es rica por ser puerto marítimo, contar con sistemas montañosos y selváticos y conectar con Centroamérica, siendo una de las rutas utilizadas por los grupos armados ilegales para comercializar la cocaína. Sus tierras fértiles han sido por años propicias para el cultivo del banano y de forma más reciente, de la palma aceitera.

En la década de 1970 y 1980 la guerrilla delinquiró en esta región y a partir de 1995 los paramilitares, que fueron enviados por la Casa Castaño. En el Urabá antioqueño delinquiró un grupo a cargo de Hébert Veloza alias 'H.H.', conocido como el Bloque Bananero, mientras en el Urabá chocoano lo hizo el Bloque Élmer Cárdenas a cargo de Freddy Rendón alias 'El Alemán'. Entre los años 1997 y 2009 fueron cometidas 44 masacres en las que fueron asesinadas 412 personas, 448 personas pisaron minas antipersonales, y 323.228 personas fueron desplazadas, de las cuales 128.405 abandonaron sus tierras entre 2000 y 2003.

El Salado, Carmen de Bolívar, Bolívar

La población del Salado sufrió uno de los capítulos más crueles de la historia de Colombia. En febrero de 2000 un grupo de paramilitares entró a este corregimiento del municipio de Carmen de Bolívar y asesinó a 66 personas entre hombres, mujeres y niños, acusándolos de guerrilleros. Tras la masacre, los saladeños se desplazaron y el pueblo quedó desarticulado y sin tierras.

La Libertad, Sucre

En este corregimiento de Sucre, los pobladores fueron víctimas de torturas y maltratos por parte del Bloque Héroes de los Montes de María, a cargo de Rodrigo Mercado Pelufo alias "Cadena" y Marco Tulio Pérez alias "El oso". Los paramilitares establecieron castigos públicos, impusieron trabajos forzados, se apoderaron de las fiestas patronales e hicieron valer por las armas privilegios económicos y sociales.

La Gabarra, Norte de Santander

En este corregimiento de Tibú, la población sufrió masacres y desplazamientos por parte del Bloque Catatumbo a cargo de Salvatore Mancuso. Este grupo paramilitar incursionó esta región en 1999 cuando las AUC enviaron paramilitares a Norte de Santander con el pretexto de combatir a la guerrilla y de paso controlar las rutas de narcotráfico de la zona.

Las masacres ocurridas el 29 de mayo y el 27 de agosto de 1999 dejaron 100 víctimas y provocaron el desplazamiento de por lo menos dos mil personas que terminaron buscando refugio en Venezuela, el país vecino. En Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) exparamilitares como Jorge Iván Laverde alias “El Iguano” confesaron que las AUC instalaron crematorios en el Catatumbo para desaparecer a sus víctimas. La Fiscalía documentó además por lo menos 25 casos de violencia sexual contra mujeres.

El Tigre, Putumayo

Los paramilitares del Bloque Sur Putumayo llegaron a esta región del país en 1997, por encargo de la Casa para finales de la década de 1990 ya delinquían en Puerto Asís, El Placer, La Dorada, Santa Ana y Orito donde cometieron masacres y desplazamientos.

El Tigre, inspección del municipio de La Hormiga, ha estado desde la década de 1980 en disputa por los grupos armados por tratarse de un corredor estratégico de movilidad y de tráfico de la cocaína. Este poblado fue estigmatizado como zona guerrilla y con ese pretexto las AUC cometieron una masacre allí el 9 de enero de 1999.

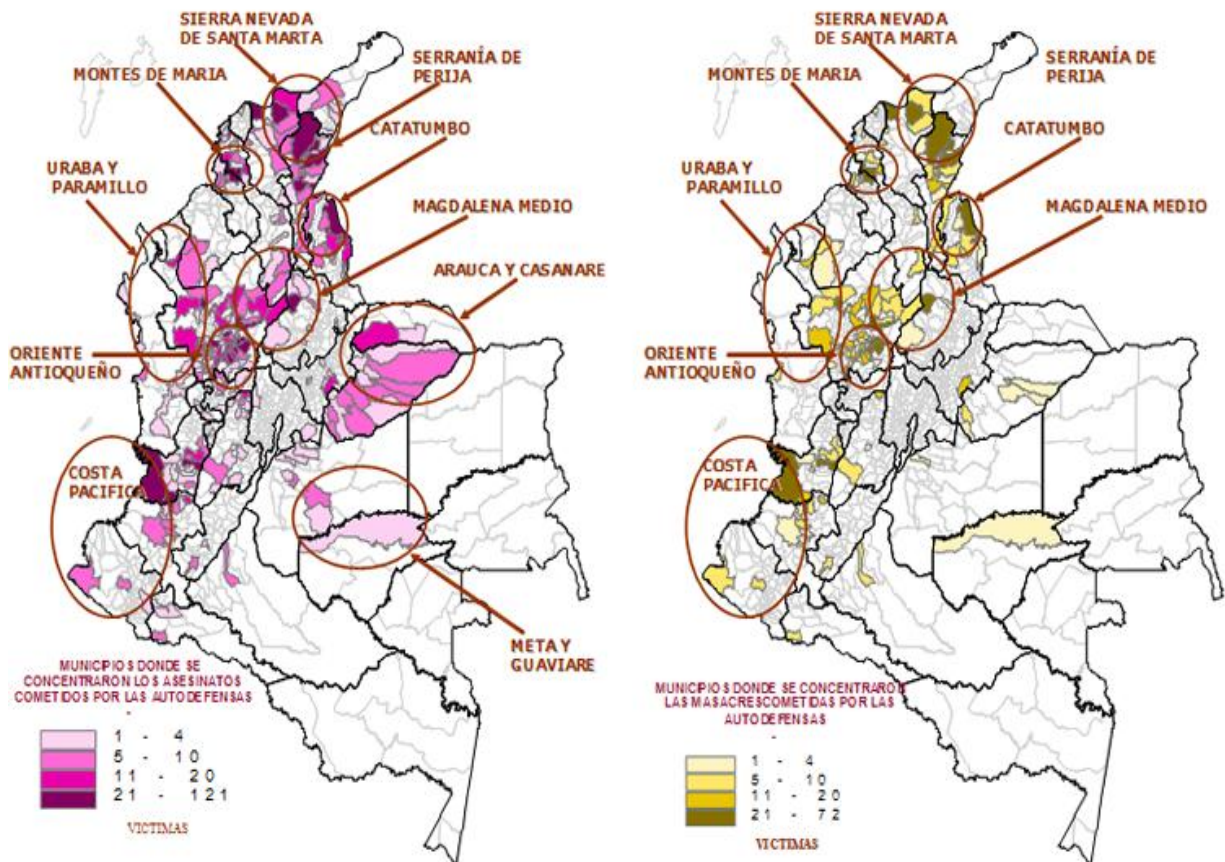
Esta fue además una zona donde los paramilitares cometieron delitos sexuales. Abusaron de mujeres y niñas, y atentaron además contra comunidades étnicas como el Cabildo Embera y el Consejo Comunitario de Negritudes de la Vereda Villa Arboleda. Este grupo paramilitar dejó por lo menos 5.500 víctimas en Putumayo.

Buenos Aires, Cauca

Por más de veinte años este municipio estuvo en la mira primero de las FARC y luego de los paramilitares del Bloque Calima, a cargo de Hébert Veloza alias 'H.H', de este pueblo fueron desplazadas 7.559 personas entre 2000 y 2002 tras el conflicto por el control de los cultivos de coca y amapola y el dominio de corredores estratégicos.

GRAFICA 1

Comparación del patrón de concentración de los asesinatos y las masacres 1998 - 2001



Fuente: observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario

MASACRES

El fenómeno de violencia en Colombia protagonizado por organizaciones guerrilleras y los grupos ilegales de autodefensas (AUC), cobro una gran cuota de vidas humanas, incluyendo mujeres y niños destacándose los homicidios colectivos (la comunidad de Mampuján los días 10 y 11 de marzo del año 2000, un corregimiento de María La Baja, Bolívar; Mapiripan, 15 al 20 de julio de 1996; Ituango- el aro, 22 de octubre de 1997; San José de Apartado 21 de febrero de 2005; El Salado 16 de febrero del 2000; el Chengue de 13 de febrero 2001), sino que también han obligado a cientos de miles de colombianos a abandonar sus hogares y a desplazarse a los centros urbanos de la patria, en busca de protección, con las consecuencias sociales y económicas que el desplazamiento forzado implica.

De acuerdo a lo mencionado anteriormente se puede señalar que los grupos paramilitares fueron organizaciones delictivas y criminales, que en su forma de actuar, sirvieron a distintos intereses particulares y en contra de la sociedad. Inicialmente actuaron como grupos de autodefensas al servicio de las élites regionales (ganaderos y caciques políticos), para defenderlas de los ataques de los grupos guerrilleros que pretendían despojarlos de sus tierras y sus riquezas, y que con su accionar por fuera de la ley, causaron grandes daños a la población civil, como las masacres y los desplazamientos.

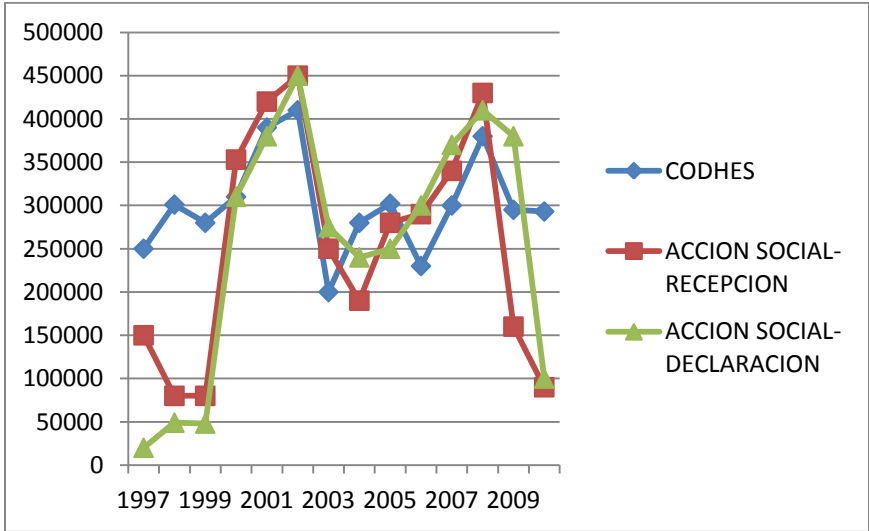
El desplazamiento forzado de la población se ha convertido en parte de una estrategia de control territorial, como paso previo a la consolidación de dominios locales y regionales, y a la acumulación de poder por parte de los actores armados que han conseguido, con relativo éxito, disputar al Estado, en muchas regiones, el monopolio de la violencia.(Cubides, 2006)

Las comunidades, ante la presión de los grupos armados en los cascos urbanos, ubicados en zonas en disputa a lo largo de los ríos y carreteras, se ven forzadas a desplazarse hacia las áreas selváticas, o quedan inmobilizadas en sus lugares de residencia. En buena parte de estos escenarios se producen bloqueos económicos y retenes en el suministro de provisiones. Como resultado, las comunidades se ven obligadas a desplazarse o imposibilitadas para moverse y acceder a los servicios mínimos.

El desplazamiento forzado (Grafico 2) sigue siendo una constante de la crisis humanitaria y derechos humanos en Colombia, que afecta casi todo el territorio nacional. Las 280.041 personas desplazadas llegaron a 1.014 municipios de 31 departamentos en busca de protección y apoyo. En promedio se desplazaron 778 personas se desplazaron cada día en Colombia. (CODHES, 2011).

GRAFICA 2

**DATOS COMPARATIVOS ACCION SOCIAL – CODHES
VARIABLE: NUMERO DE PERSONAS DESPLAZADAS 1997-2010**



FUENTES: ACCION SOCIAL – CODHES A 2010.

RELACIONES DEL PARAMILITARISMO

PARAMILITARISMO Y EL *NARCOTRAFICO*

Posteriormente se aliaron con grupos de narcotraficantes que les inculcaron formación militar y de combate y que los utilizaron para proteger a sus familias y el negocio de los cultivos de coca, manteniendo el daño a la sociedad. En un tercer periodo, los paramilitares estructuraron su propio negocio de narcotráfico -como fuente de financiación- y su organización militar, buscando adquirir poder político y económico, sin limitar sus acciones. En ese objetivo, lograron infiltrar las autoridades (alcaldes, militares y policías) y organizaciones del Estado y suscribir alianzas con los políticos regionales (gobernaciones) para compartir el poder del Estado.

La desaparición de los grandes carteles aumentó la participación de los grupos armados en el negocio de la droga. Entre otras cosas, porque a los nuevos empresarios del narcotráfico no les interesaba controlar toda la cadena de producción de cocaína, sino subcontratar partes de la cadena a actores especializados. Esto le abrió la posibilidad a los grupos armados de controlar la producción de cultivos ilícitos. De hecho, la guerrilla y los grupos paramilitares se especializaron tanto en esta porción de la cadena de producción que se responsabiliza de la expansión de cultivos ilícitos en el país como consecuencia de la intensificación del conflicto armado.

A partir de la segunda mitad de los noventa la presencia de cultivos de coca se intensificó notablemente en el territorio colombiano (ya no era necesario importar la base de coca de Perú y Bolivia) abriendo espacios a una nueva distribución de tareas dentro del negocio: los actores armados estaban al mando de cultivos y

laboratorios de procesamiento, mientras que los narcotraficantes tenían en control de rutas y el comercio exterior.

El aumento de cultivos fue evidenciado por los campesinos cocaleros que marcharon entre 1994 y 1996 contra las políticas antinarcóticos y de fumigación de cultivos ilícitos en Caquetá, Guaviare y Putumayo. Este movimiento que reunió aproximadamente a 120,000 campesinos, reflejó un notorio interés de las FARC en el negocio del narcotráfico (especialmente en los primeros eslabones de la cadena) y la fuerte articulación entre los campesinos y la guerrilla. A su vez, el movimiento cocalero indicó los cambios que se avecinaban en el negocio del narcotráfico y la urgencia de buscar políticas antinarcóticos no solamente punitivas y orientadas hacia los grandes carteles, sino socio-ambientales y dirigidas hacia los eslabones más débiles de la cadena.

En 1994, mientras los campesinos marchaban con el apoyo de las FARC en el sur del país, Carlos Castaño asumió el liderazgo de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, AUC, y en 1997 consolidó las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, con el fin de organizar a los diferentes grupos paramilitares bajo un mismo proyecto político. La intención de unificación de las autodefensas requirió grandes sumas de dinero, que en parte cubrieron con el negocio de la droga.

De esta forma, tanto para las autodefensas como para las FARC el negocio cobró una importancia fundamental, pues los ingresos del narcotráfico se convirtieron en una de sus principales fuentes de financiación. Las marchas cocaleras y la consolidación de las AUC demostraron que la coca era un recurso fundamental para los actores armados pues cumple la doble función de proporcionar base social para estos grupos principalmente a través de la fuerza laboral ligada a los cultivos ilícitos e ingresos para escalar y expandir su actividad armada. Por esta razón, a finales de los noventa, los enfrentamientos entre los grupos armados se intensificaron por el control de los territorios con plantaciones de coca.

El dinero proveniente del negocio de la producción y comercialización de drogas ilícitas se constituyó en un factor preocupante y de minucioso seguimiento por parte del estado por el poder que le genera a estos grupos paramilitares, lo cual se ve reflejado en la forma de buscar el apoyo de funcionarios corruptos para lograr sus intereses particulares plasmados de actos deshonestos y violentos. Lo anterior en forma prospectiva quedó plasmado en el libro *La guerra en el fin del siglo*, “Si los paramilitares se apropiaran de los recursos de las drogas, la situación habría llegado en su favor al punto de no retorno. En este sentido, y si no hay antes un proceso de paz exitoso, el que gana la guerra de la coca, gana la guerra” (Rangel, 1998).

EL ESTADO Y GRUPOS SOCIALES

Haciendo uso de una de las versiones plasmadas en la historia algunos miembros de grupos paramilitares surgieron de la relación ejército - ganaderos latifundistas, para combatir a los grupos guerrilleros asentados en la zona del Magdalena Medio, que extorsionaban a los grandes propietarios de tierra, a través de extorsiones, y que los desplazaban cuando aquellos se negaban al pago. Con el tiempo, dichas organizaciones paramilitares o de autodefensas (AUC), se fueron extendiendo a los distintos ámbitos del territorio del País, en particular las zonas de Córdoba y Urabá (Apartado, Chigorodó, Nueva Colonia, el Dos, San Pedro de Urabá) infiltradas por otros grupos generadores de violencia, como los narcotraficantes, quienes la utilizaron para consolidar su poder territorial, y cometer todo tipo de atrocidades y barbaries en contra de la población civil.

Durante la década de los años ochenta las tasas de asesinatos y desapariciones de pobladores inermes, miembros de movimientos sociales y políticos, principalmente opositores de los gobiernos de turno, quienes fueron señalados por los grupos paramilitares como *"guerrilleros de civil"*. Bajo esa estrategia, de

imputarle sumariamente a los civiles vínculos con las guerrillas, el paramilitarismo volcó su accionar contra la misma población, para obtener beneficios particulares.

En efecto, la lucha por el dominio y propiedad del territorio, como medio de adquirir poder y riqueza, sumada a una política de paz en medio de la violencia y que limitaba la acción legítima de la fuerza pública, terminó por generar grandes fenómenos de desplazamiento, empobrecimiento y delincuencia, que llevó a la reacción de ganaderos o comerciantes propietarios de tierras, quienes dentro del interés de mantener su poder o capital procedieron a conformar y patrocinar ejercitos de civiles para su autodefensa contrainsurgente, con la ayuda, apoyo de algunos miembros de la fuerza pública, que para estos efectos actuaba por fuera del marco de la ley y el orden preestablecido, y de forma secreta.

No obstante, a la lucha para eliminar la guerrilla, se sumaron también los objetivos de exterminio de los líderes políticos de izquierda, reinsertados y surgidos de la civilidad, que fueron asesinados con la ayuda de algunos miembros de la fuerzas del orden por grupos paramilitares. Con el propósito de imponer su autoridad y de obtener el poder político, económico y social en Colombia, los grupos paramilitares han acudido a formas de violencia extrema, violatorias de la dignidad humana y contrarias al derecho internacional humanitario, como son las masacres mencionadas anteriormente y el desplazamiento forzado interno; de este último será específico más adelante se expondrá.

LA FUERZA PÚBLICA Y AUTORIDADES CIVILES

Dentro del proceso evolutivo del paramilitarismo, la fuerza pública cumplió un papel preponderante, en el origen de las AUC, apoyo la formación y acompañó algunas de sus acciones, prestándoles su colaboración. Es de público conocimiento, que durante los últimos 20 años, un gran número de miembros de

las fuerzas armadas y de la policía, han sido vinculados a procesos penales por acciones delictivas de los paramilitares y han sido condenados por delitos atroces como es de conocimiento público.

Además, de las autoridades es sano mencionar que también ciertos grupos económicos coadyuvaron en este proceso, como es el caso de empresarios, ganaderos, industriales y comerciantes. Estos sectores justificaron su proceder en el hecho de que el Estado tuvo dificultades en algunas regiones para controlar la insurgencia guerrillera y para garantizarles a todos sus ciudadanos los derechos y libertades. En esta medida, consideraban que la inseguridad, la ausencia del Estado y falta de ejercicio de soberanía en las regiones, legitimaban la formación de grupos privados para la autodefensa.

El Estado ha rechazado públicamente tanto en el contexto interno como en el escenario internacional, la formación de grupos paramilitares y las acciones que han realizado, especialmente, contra la población civil. A través de sus distintas autoridades, ha combatido y sometido a la justicia las acciones delictivas de sus integrantes, persiguiendo a sus líderes, para imponerle las sanciones que correspondan.

DESMOVILIZACION DEL PARAMILITARISMO

Durante el primero y segundo gobierno del Presidente Álvaro Uribe (2002 – 2006, 2006 – 2010), se adelantó una política de seguridad, desmovilización y reinserción de los grupos al margen de la ley, incluido los paramilitares. La desmovilización de las autodefensas, se produjo en cumplimiento de lo que se conoció como "el acuerdo de Santa Fe de Ralito", firmado el 15 de julio de 2003 entre los principales líderes de los grupos de autodefensas y el gobierno de Uribe Vélez durante su primer cuatrienio. Fruto de ese acuerdo, se expidió por el Congreso de la República la Ley 975 de 2005, para someterlos y juzgarlos por sus delitos, bajo

unas condiciones especiales, garantizando en todo caso los principios de verdad, justicia y reparación. Dicha ley, conocida como "*Ley de Justicia y Paz*", busco entonces reincorporar a la vida civil a los ex combatientes de los grupos armados irregulares y juzgar a sus líderes y responsables por los delitos que han cometido en el desarrollo de sus actividades, siendo beneficiarios de penas menos rígidas a cambio de la confesión y reparación de tales conductas.

Con la llegada al poder de Álvaro Uribe se inicia la desmovilización y desarme de 34 bloques de las Autodefensas Unidas de Colombia. Comenzaría el proceso de Justicia y Paz con el que se buscaba la verdad, justicia y reparación de las víctimas de los paramilitares. Las desmovilizaciones de las autodefensas se iniciaron el 25 de noviembre de 2003 en Medellín con el bloque Cacique Nutibara y terminaron el 15 de agosto de 2006 con el bloque Elmer Cárdenas. En 38 actos se desmovilizaron 31.671 de los integrantes de los grupos irregulares. Las organizaciones con mayor número de desmovilizados fueron el bloque Central Bolívar con 6.348, el bloque Norte con 4.760, el bloque Mineros con 2.780, el bloque Héroes de Granada con 2.033 y el bloque Elmer Cárdenas con 1.538.

Desde agosto de 2002 y hasta enero de 2010 se han desmovilizado 52.403 personas, 31.671 procedentes de grupos paramilitares que dejaron las armas de manera colectiva, y 20.732 miembros de grupos guerrilleros y paramilitares que se desmovilizaron individualmente. Según información de la Policía Nacional, entre el año 2001 y el mes de diciembre de 2009 han sido capturados 5.890 desmovilizados y han muerto 2.210.

Si bien los términos de la Ley han sido cuestionados por amplios sectores de la comunidad, bajo la idea que la ley es muy flexible en las sanciones a imponer y genera impunidad, la misma ha tenido la aceptación en el contexto internacional. Para llevar a cabo la ejecución de la ley de justicia y paz, se crearon instituciones especializadas, a nivel de la administración de Justicia y de la Rama Ejecutiva,

con cargo al presupuesto general de la nación. Los órganos judiciales, fueron creados para ocuparse de manera especial y única, de lo concerniente a la investigación, procesamiento, sanción y beneficios judiciales de las personas vinculadas a grupos armados organizados al margen de la ley, como autores o partícipes de hechos delictivos cometidos durante y con ocasión de la pertenencia a esos grupos, que hubieren decidido desmovilizarse y contribuir decisivamente a la reconciliación nacional.

Aun cuando existan serias críticas sobre la ley de reparación (Ley de víctimas y restitución de tierras, 2011) de víctimas de la violencia armada en Colombia, sobre la base de los altos e incalculables costos que demandaría para las finanzas públicas, si con ello se contribuye a lograr la paz y la reconciliación nacional en Colombia y permitir que las víctimas de la violencia armada reivindiquen su dignidad y desarrollen su modelo de vida, debe darse vía libre al mismo, pues, frente a dicho propósitos, cualquier cantidad de recursos resultarían ínfimos en pro de alcanzar este objetivo.

Pero este es el punto donde debe haber un mayor esfuerzo por parte del estado porque al mismo tiempo de incrementar el pie fuerza se debe asignar un mayor presupuesto para invertir en infancia y adolescencia, deporte y recreación, promoción de cultura (respeto a las razas existentes), educación, tecnología, oportunidades de empleo, y lo más importante una estrategia cuya base sea presentar y desarrollar una alternativa social para la sustitución de cultivos o drogas ilícitas.

Para argumentar estas falencias se describirá el concepto o palabras de un señor general del Ejército Nacional quien manifestaba que la “acción integral es el desarrollo y coordinación permanente, simultánea y coordinada de acciones políticas, económicas, sociales y militares encaminadas fortalecer las estructuras básicas del estado y garantizar la defensa y protección de los deberes y libertades

de la sociedad, para que los habitantes de Colombia, haciendo uso de su libertad y dentro de los derechos humanos y deberes constitucionales, alcancen el gozo pleno de una paz digna, justa y duradera, que les permita desarrollarse y progresar como seres humanos”.(Tapias,2001).

Esta acción integral significaba que los problemas de orden público generados para este caso por los paramilitares solo se pudieron haber disminuido con una voluntad política clara donde el estado hubiera hecho presencia en todos los campos o territorio nacional y no solo en lo militar como sucede actualmente.

Se cumplen buenos años del proceso de desmovilización de las organizaciones paramilitares, y los gobiernos de Uribe y Santos que se han empeñado en dar parte de éxito total. Según cifras oficiales, a febrero 21 de 2012, son 35.407 los integrantes de estos grupos quienes han dejado las armas².

A pesar de todos los esfuerzos realizados por la Policía, la lucha contra las BACRIM se ha convertido en un dolor de cabeza, sin importar los sendos resultados que se han dado en los últimos tiempos. Hechos como la muerte de alias “Cuchillo” y “Giovanni”, líderes del Erpac y de Urabeños respectivamente; la captura de alias “Pablito”, “Martín Llanos” y el sometimiento a la justicia del Erpac, despertaron un optimismo mediático, pero que poco o nada han sido detonantes reales para su verdadera desaparición.

² Datos del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado (GAHD) Y Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

Una síntesis de la presencia de las BACRIM, basada en cuatro informes de la Policía Nacional desde 2008 hasta 2011, y en diversas declaraciones públicas y otros documentos oficiales, arroja los siguientes resultados³. (GRAFICO 3)

Presencia de Bacrim 2008 – 2011				
	2008	2009*	2010*	2011
Número de grupos	16 estructuras	6 Bacrim	6 Bacrim	7 Bacrim
Número de municipios	94	159	159	151
Número de departamentos	17	18	18	17
Número de integrantes	1988 a 2000	3749	3749	4154

Fuente: Las cifras de 2009 y 2010 son iguales, según la Policía.

Fuente: Policía Nacional. Dirección de Carabineros y Seguridad Rural.

LA MULTICRIMINALIDAD

La multicriminalidad es “una categoría referida al conjunto de actividades desarrolladas por parte de grupos organizados de manera corporativa, cuyo propósito es la obtención de ganancias por la realización de actividades ilegales. A pesar de que el narcotráfico engloba buena parte de estas actividades, el fenómeno también incluye otros delitos como la corrupción de funcionarios y agentes públicos, las diversas modalidades de tráfico ilegal (personas, armas), los fraudes, las migraciones clandestinas, los delitos informáticos, la prostitución y la piratería intelectual entre otras conductas”. (Ferrajoli, 2009).

El mejor ejemplo para abordar este tema en forma constructiva es el de los grupos de delincuencia común y las BACRIM que son el relevo generacional de los paramilitares, a los cuales se les debió ofrecer una alternativa social ante los

³ Informe de la Policía Nacional noviembre de 2008.

eventos de desmovilización al igual que en el proceso de paz que se avecina con las FARC.

La disolución y erradicación de los grupos paramilitares y la extinción de cualquier vínculo entre éstos y los distintos sectores de la sociedad colombiana y del Estado, se constituye en un propósito urgente e ineludible para que el país pueda seguir recuperando su institucionalidad y sus habitantes llevar una vida digna y justa. No debería ocurrir que este tipo de organizaciones armadas, con insaciable deseo de poder, continúen llevando a cabo actos de terror y crímenes de lesa humanidad en contra de la población y con la anuencia de ciertas personalidades (congresistas), autoridades (gobiernos municipales y departamentales) y económicos (empresas).

CONCLUSIONES

La violencia paramilitar en la comunidad colombiana en los últimos veinte años en Colombia causó muertes, desplazamientos y masacres; como muestra del poder y el control que tuvieron sobre las entidades estatales y sobre la población nacional.

El estado tiene el deber de dismantelar los grupos al margen de la ley, perseguir a sus promotores y colaboradores, así como también establecer y adelantar el enjuiciamiento de los responsables de cada uno de los actos que han perjudicado a la comunidad, es indispensable que se lleve a cabo para así llegar a reconstruir la verdad y lograr un país más igualitario y justo, en busca de brindar seguridad para generar un desarrollo permanente y de esta manera acercarnos a la preservación de los altos intereses y el bien común de los colombianos mediante un acertada estrategia de seguridad y defensa con los suficientes recursos para que sea sostenible a mediano y largo plazo.

La posición de los gobiernos y comunidad en general frente a estos grupos debe ser, por supuesto, de total y absoluto rechazo. En Colombia, los fenómenos de violencia en general, y la violencia ejecutada por estos grupos paramilitares, han desestabilizado la sociedad y ha causado daños irreparables en nuestra nación. El hecho de que el paramilitarismo haya actuado por fuera de la ley y en alianza con grandes grupos delincuenciales, deslegitima cualquier justificación posible sobre su existencia.

Implementar una política estatal donde haya una estrategia de control territorial donde existan acciones coordinadas entre las diferentes entidades del estado, que desarrollen acciones integrales las cuales garanticen el esfuerzo en conjunto de las fuerzas legítimas, políticas sociales- económicas y las acciones de las instituciones no militares y la sociedad civil.

El Estado y la comunidad en general, deben asumir el compromiso histórico de encausar todos sus actos, acciones y ejecutorias, hacia la búsqueda de la paz y la reconciliación nacional.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Codhes, (2011). *Consultoría y derechos humanos para el desplazamiento*, número 77. Bogotá.

Cubides, Fernando (2006). *La Participación Política del Campesinado en el Contexto de la Guerra: el caso colombiano*, Pág. 135.

Ferrajoli, (2009). Criminalidad y globalización. La fuerza pública y los retos del futuro, Ministerio de Defensa Nacional, Pág. 18.

Ley de justicia y paz 975 (2005). Artículo 1.

Rangel Suarez, Alfredo (1998). *Guerra en el Fin del Siglo*, Primera Edición, Pág. 50.

Rangel Suarez, Alfredo (2001) *Guerra Insurgente*, Pág. 412.

Rosanía, Néstor. (2012) *Conferencia de la Prospectiva en Seguridad y Defensa*, UMNG.

Sánchez, Ricardo, (2010) ¿Un error Estructural? Revista *Fuerzas Armadas*, Edición 216, Págs. 10,15.

Tapias Stahelin, Fernando (2001). *Estrategia de Acción Integral en la Fuerzas Militares de Colombia*, Ensayos sobre defensa y Seguridad, Pág. 81.

Comando general de las FFMM (1996). *Manual de Seguridad y Defensa; El Fin del Estado*, Imprenta y publicaciones de las FFMM, Bogotá D.C, 1ª Edición. Pág. 17.